

JUICIO DE NULIDAD

EXPEDIENTE: CEJP-MI-JN-006/2013.

PROMOVENTE: VECINOS DE LA COLONIA RANCHO DE MAYA Y DEL SECCIONAL 5353 DEL MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO.

RESPONSABLE: COMISIÓN MUNICIPAL DE PROCESOS INTERNOS EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

R A Z Ó N.- En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los ocho días del mes de julio del año dos mil trece, el Licenciado LUÍS REYNA GUTIÉRREZ, Secretario General de Acuerdos de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, da cuenta al Presidente de la misma, Licenciado JORGE TORRES RODRÍGUEZ, de las constancias de fijación y retiro del acuerdo de prevención de fecha seis de julio del año en curso, recaído al escrito presentado en fecha dos de julio del presente, por **VECINOS DE LA COLONIA RANCHO DE MAYA Y DEL SECCIONAL 5353 DEL MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO**, en contra de diversos actos y resoluciones derivados del proceso interno para la elección de dirigentes del Comité Seccional 5353 del Partido Revolucionario Institucional en Toluca, Estado de México para el periodo 2013-2016; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. ----- **CONSTE.** -----

LIC. LUÍS REYNA GUTIÉRREZ.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

ACUERDO DE DESECHAMIENTO

Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de julio del año dos mil trece.

VISTOS los escritos de los que se da cuenta, consistentes en la razón de fijación, de fecha seis de julio de dos mil trece y, la cédula de levantamiento de estrados, de fecha siete de julio del presente año, relativos a la publicación del acuerdo de prevención de fecha seis de julio del año en curso, recaído al escrito presentado ante la autoridad responsable, Comisión Municipal de Procesos Internos en el Municipio de Toluca, Estado de México, por **VECINOS DE LA COLONIA RANCHO DE MAYA Y DEL SECCIONAL 5353 DEL MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO**, en contra de diversos actos y resoluciones derivados del proceso interno para la

elección de dirigentes del Comité Seccional 5353 del Partido Revolucionario Institucional en Toluca, Estado de México para el periodo 2013-2016; acuerdo por el que se previene a los promoventes para que subsanen su escrito inicial dentro del término establecido en el mismo, por lo que, en cumplimiento a dicho acuerdo de prevención, se actúa en términos del mismo, atento a lo cual; y - - - - -

RESULTANDO

I.- El Consejo Político Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Toluca, Estado de México, autorizó al Comité Municipal la expedición de la Convocatoria para la elección de dirigentes de los trescientos tres Comités Seccionales de este instituto político en ese Municipio, para el periodo estatutario 2013 - 2016. - - - - -

II.- Con fecha catorce de junio de dos mil trece, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Toluca, Estado de México, llevó a cabo la publicación de la Convocatoria para la elección de dirigentes de los trescientos tres Comités Seccionales de este instituto político en ese Municipio, para el periodo estatutario 2013 - 2016. - - - - -

III.- Con fecha dos de julio del presente año, diversos vecinos del Municipio de Toluca, Estado de México, presentaron escrito de impugnación en contra de diversos actos y resoluciones recaídas al proceso interno de elección de Dirigentes de los 303 Comités Seccionales del Partido Revolucionario Institucional en ese Municipio. - - - - -

IV.- En fecha seis de julio del presente se pronunció acuerdo de prevención recaído al mencionado escrito inicial, por el que se le solicita a los promoventes subsanen su escrito bajo las consideraciones vertidas en dicho acuerdo, por lo que se les otorgó un término de veinticuatro horas para subsanar su escrito, corriendo dicho término de las catorce horas con ocho minutos del día siete de julio de dos mil trece a las catorce horas con ocho minutos del día ocho de julio del mismo año, a razón de la notificación por estrados con efectos de notificación personal. - - - - -

Por lo anterior, se procede a emitir el dictamen conducente, al tenor de los siguientes: - - - - -

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria es el órgano del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, encargado de llevar a cabo la justicia partidaria, garantizando los principios de unidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad y transparencia así como el orden jurídico en los procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, debiendo fundar y motivar sus resoluciones con base en lo previsto en los Estatutos, los reglamentos e instrumentos normativos partidistas, y aplicando supletoriamente las leyes de la materia respectiva, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 2 y 68 del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, así como los artículos 1, 2, 8 y 12 del Reglamento de Medios de Impugnación. - - - - -

SEGUNDO.- Que los actos señalados por los promoventes en el escrito de inconformidad que se provee, se tratan de actos emitidos por órganos o dirigentes del Partido con jurisdicción en el Estado de México, de conformidad con los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, V, X y XII y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 3, 5 fracción II y 8 del Reglamento de Medios de Impugnación, por lo que esta Comisión Estatal es competente para conocer de la presente controversia. - - - - -

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos antes invocados, así como del artículo 49 fracciones II, III y VII del Reglamento de Medios de Impugnación, corresponde a esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, emitir un dictamen en el que se determine, previo análisis de las pruebas respectivas, sobre la procedencia o improcedencia de la denuncia. - - - - -

CUARTO.- Que antes de entrar al estudio de fondo, por economía procesal y toda vez que es esencial para emitir una resolución, resulta conveniente iniciar por revisar si se cumplen los requisitos de procedibilidad señalados en los ordenamientos aplicables, y si éstos se encuentran debidamente satisfechos, por lo que en el presente caso, una vez realizada la revisión oficiosa se encontró que, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 párrafo primero, 18 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 21 fracción I, 22, 23 fracciones I, III y VII y 49 fracción IV del Reglamento de Medios de Impugnación, **LOS IMPUGNANTES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DE PROCEDIBILIDAD** establecidos en los numerales invocados, necesarios para la admisión y sustanciación de la presente Inconformidad, de conformidad con las siguientes consideraciones: - - - - -

Primeramente, el actor presenta su escrito sin señalar el carácter con el que promueven, ni presentar documental alguna con la que se pueda determinar dicho carácter; no señalan domicilio en la ubicación territorial de esta Comisión en el que pueda localizárseles para oír y recibir notificaciones; de los hechos narrados en su escrito, no se identifican acto o resolución ni autoridad responsable, de manera expresa, a la que pueda incoarse el presente recurso de impugnación, requisito esencial que no se satisface y el cual es indispensable para dar trámite a su eventual solicitud; no hace una descripción cronológica de los hechos que se presuman causa del agravio; no menciona los artículos que estima violen sus derechos partidarios; no señala, ofrece ni acompaña prueba alguna a su escrito inicial; asimismo, no presenta puntos petitorios claros, lo que deviene en la obscuridad de su escrito, a razón de que esta autoridad intrapartidaria carece de elementos para determinar siquiera a manera presuntiva, cuál es la pretensión del actor; lo anterior incumple cabalmente con los requisitos formales de presentación de su escrito inicial, conforme a lo establecido por las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación intrapartidaria. Se transcribe el mencionado artículo para su análisis y referencia:

*“**Artículo 18.-** Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, y deberán cumplir con los requisitos siguientes:*

- I. Presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación;*

- II. Dirigirse al Presidente de la Comisión competente;
- III. Estar escritos en idioma español;
- IV. Hacer constar el nombre del actor y describir la personería o carácter con la que se comparece y acreditarla con los documentos respectivos;
- V. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ubicación territorial de la Comisión correspondiente y, en su caso, autorizar a quien en su nombre las pueda oír y recibir; apercibido que de no hacerlo, todas, incluidas las personales, se realizarán válidamente por estrados;
- VI. Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo;
- VII. Hacer la descripción cronológica de los hechos que se presuman sean causa de agravio;
- VIII. Mencionar los artículos que se estimen violados en su perjuicio;
- IX. Señalar las pruebas que ofrezca y/o acompañe al escrito que estén relacionadas con los hechos que reclama; y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano partidario correspondiente y no le hubieren sido entregadas. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho no será necesario cumplir con este requisito;
- X. Contener los puntos petitorios que describan lo que se solicita de la Comisión ante la que se comparece; y
- XI. Hacer constar la firma autógrafa de quienes en ellos intervengan o, en su caso, contener su huella digital impresa.

El incumplimiento de los requisitos previstos en las fracciones I, **VI** y XI, dará lugar al **desechamiento de la instancia**".

Visto lo anterior, es imperativo mencionar que el escrito que se presenta actualiza diversas causales de IMPROCEDENCIA, señaladas en el artículo 23 fracciones I, III y VII del mencionado Reglamento, toda vez que el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad mencionados devienen en un consecuente **DESECHAMIENTO**, según lo estipulado en el artículo 49 del mencionado Reglamento. - - - - -

QUINTO.- Efectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 fracciones I, III y VII del Reglamento de Medios de impugnación, las causales de IMPROCEDENCIA que al efecto se actualizan, son las siguientes: - - - - -

"Artículo 23.- Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes en los siguientes casos:

- I. **Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;**
- II. **Se presenten fuera de los plazos señalados en este Reglamento;**

- III. **Cuando el promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento;**
- IV. *El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable, o que se hubiesen consentido tácita o expresamente;*
- V. *No se hayan agotado las instancias previas en su caso;*
- VI. *Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección; y*
- VII. **Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o bien porque de los hechos que se expongan no pueda deducirse agravio alguno**.

Esto es, primeramente, porque el actor no hace mención del carácter por el que promueve, siendo que durante el desarrollo de su escrito, hace mención de que su molestia se basa en que “...

El grupo de personas que suscribimos este escrito y una gran mayoría de los que habitamos en esta Colonia y Seccional, manifestamos a ustedes nuestra enérgica protesta y oposición a que las personas que, haciendo uso de artimañas, se han infiltrado para hacer un registro ilegal y han impedido la libre participación de vecinos en una contienda electoral y democrática...” (sic), situación que no permite a esta autoridad resolutora determinar si el actor se refiere a una persona, a un grupo de personas, a una autoridad o a algún ente jurídico específico sobre quien vierte su malestar y se duele respecto a alguna decisión de persona alguna, lo que no brinda ninguna certeza, en un principio sobre quién es la autoridad responsable o el acto específico por el que se queja y, en segunda instancia, dentro de su escrito de impugnación no especifican el nombre de los quejosos, lo que resulta en una obvia falta de personería y consecuente falta de interés jurídico, así como la falta de agravios por los que se duelan en caso de una lesión a sus derechos partidarios.

Por lo anterior, de la revisión oficiosa llevada a cabo por esta autoridad intrapartidaria, se determina que el presente escrito actualiza lo señalado en el artículo 49 fracción IV, por lo que de conformidad con dicho precepto, procede emitirse **ACUERDO DE DESECHAMIENTO**, toda vez que la presente inconformidad resulta notoriamente improcedente, y en consecuencia deberá decretarse su desechamiento sin entrar al estudio del fondo de la misma. - - - - -

En el presente asunto, como ha quedado señalado, se incumplió con los requisitos de procedibilidad referidos en el presente considerando, por lo que se actualiza objetivamente la hipótesis jurídica establecida en la fracción IV del Artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación antes mencionado, que a la letra dice: - - - - -

“Artículo 49.- Recibida la documentación a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento, se estará a lo siguiente:

I.

...

IV. Si de la revisión de oficio de la procedibilidad del medio de impugnación se advierte que se incumple alguno de los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, que resulta

evidentemente frívolo o bien encuadra en una de las causales de improcedencia o sobreseimiento, el Presidente de la Comisión competente, asistido por el Secretario General de Acuerdos, emitirá el acuerdo correspondiente para su desechamiento;

...
V. ...”

Por lo que en términos de la fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el Desechamiento de Plano, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. - - - - -

SEXTO.- En cuanto al requisito de acreditar la personería exigido por la fracción IV del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación citado, se encuentra que es requisito indispensable de procedibilidad la acreditación de la personería con la que comparece el actor, esto es, que sea **promovido por militante del Partido Revolucionario Institucional**, considerando lo señalado en el artículo 22 del Reglamento de Medios de Impugnación, que establece que “*La personería se acredita mediante la exhibición del documento en original o copia certificada en el que conste tal carácter, el que deberá acompañarse a la promoción respectiva*”. En consecuencia, el ciudadano que promueva un medio intra-partidista de defensa al considerar violados sus derechos como militante del Partido Revolucionario Institucional, deberá acreditar fehacientemente tal carácter mediante la documental o el instrumento idóneo, esto es, la exhibición del instrumento en original o copia fotostática certificada en el que conste el carácter de militante priista con el que promueve, y en el caso concreto que nos ocupa, toda vez que en el Acuerdo de Prevención de fecha seis de julio de dos mil trece, se da un plazo de veinticuatro horas para que los interesados señalen el carácter por el que promueven y lo acrediten fehacientemente con las documentales previstas en el Reglamento de Medios de Impugnación intrapartidario, los promoventes **NO PRESENTARON DOCUMENTAL ALGUNA CON LA QUE ACREDITARAN LA CALIDAD DE MILITANTE, ASPIRANTE O CANDIDATO MIEMBRO DE ALGUNA DE LAS PLANILLAS A PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE COMITÉS SECCIONALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO**, por lo que no se puede deducir de manera alguna su eventual militancia ni participación en el proceso interno que los legitime para acudir a esta instancia impugnativa, siendo que resulta evidente que si los promoventes no acreditan la calidad de militantes que les permita impugnar las actuaciones de las autoridades partidarias, **CARECEN DE INTERÉS LEGAL PARA PROMOVER EL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN** y consecuentemente se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, por lo que, en términos de la anteriormente señalada fracción IV del artículo 49 del ordenamiento reglamentario antes invocado, procede el Desechamiento de plano, sin entrar al estudio de fondo en el presente asunto. - - - - -

SÉPTIMO.- Adicionalmente de la falta de la acreditación de la personería, en el presente caso se actualiza objetivamente el **DESECHAMIENTO DE PLANO**, sin entrar al estudio de fondo de los argumentos que se contienen en el escrito inicial, por ser evidente que **DE LOS HECHOS QUE SE CONSIGNAN EN EL ESCRITO QUE SE PROVEE NO PUEDE DEDUCIRSE AGRAVIO ALGUNO**, lo que resulta claro de la simple lectura del escrito de cuenta, mismo que sólo se concreta a exponer hechos hipotéticos y comentarios de desprestigio sin presentar pruebas documentales que acrediten su dicho, ni formula un razonamiento lógico jurídico que lo sustente,

además de no vincular de manera alguna la supuesta ilegalidad que lesione sus derechos partidarios, por lo que no acreditan interés jurídico ni afectación a sus derechos partidarios, siendo procedente el desechamiento mencionado. - - - - -

OCTAVO.- Asimismo, respecto al Considerando anterior, es imperativo señalar que toda vez que al no hacer una descripción cronológica adecuada de los hechos que permitan a esa instancia presumir se cause en su agravio el acto de autoridad partidaria que constituya una evidente violación de los ordenamientos normativos del Partido, que pudieran tener relación directa con el acto que se pretende combatir, actualiza la especie la improcedencia prevista por la fracción VII del artículo 23 del ordenamiento reglamentario en cita, el cual señala:- - - - -

“Artículo 23.- Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes en los siguientes casos:

- I. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;*
- II. Se presenten fuera de los plazos señalados en este Reglamento;*
- III. Cuando el promovente carezca de legitimación en los términos del presente ordenamiento;*
- IV. El acto o resolución se hayan consumado de un modo irreparable, o que se hubiesen consentido tácita o expresamente;*
- V. No se hayan agotado las instancias previas en su caso;*
- VI. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección;*
y
- VII. Cuando los agravios manifiestamente no tengan relación directa con el acto o resolución que se pretende combatir, o bien porque de los hechos que se expongan no pueda deducirse agravio alguno**”.*

Lo que se desprende objetivamente del hecho de que los recurrentes manifiestan inconformidad en contra del proceso interno, sin referirse a qué tipo de anomalías consideran, ni presentan pruebas al respecto y no obstante, en su relación de hechos no establecen de forma alguna actos o situaciones que se relacionen con una afectación a sus derechos partidarios, siendo notoriamente oscuro e irregular en la relatoría de su propio escrito, pudiendo encuadrar en una cuestión de frivolidad, ya que de la lectura del mismo se desprende claramente que los recurrentes únicamente manifiestan situaciones generales del Partido **sin referirse específicamente a las supuestas anomalías derivadas de la elección de seccionales a la que aducen hechos irregulares que se identifiquen con los actos que manifiesta impugnar, además de que la promoción de mérito es omisa en señalar los artículos que estima violados en su perjuicio, así como en señalar las pruebas o elementos que pudieran generar convicción a este Órgano Jurisdiccional.** - - - - -

Lo anterior por ser evidente que los promoventes no presentan agravios formalmente y, aún y cuando se quisieran deducir estos de los hechos narrados en su escrito, esto no ocurre, toda

vez que los mismos únicamente se refieren a supuestos no fundados ni acreditados que, en suma, **no refieren afectación a su derecho partidario** relacionado con el acto materia de la impugnación, sobre todo por el hecho contundente de que no obran elementos de prueba idóneos que demuestren su dicho como para considerar que cuentan con el carácter para acreditar su interés jurídico, por lo que deviene claramente infundada y consecuentemente improcedente su pretensión impugnatoria, lo que se encuentra apoyado con las tesis jurisprudenciales emitidas por la Corte que a continuación se invocan: - - - - -

INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4º. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde su causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en acto que corresponda a un causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y solo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado “De la capacidad y personalidad” atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quien, a u vez, puede proseguir el juicio relativo. **Así esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia e un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional,** esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo da la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo al que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque es la Ley Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que s urge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4º., esto es, uno es l sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación de hacerlo. (apoderado, representante, defensor) y otro, **es el titular del interés jurídico afectado** con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etc).

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 202/2009. Concepción Elizabeth Cárdenas Hernández. 13 de Agosto 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Elizabeth Arrañaga Pichardo.

INTERÉS JURÍDICO. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL NO SUBSANABLE QUE DEBE SER ESTUDIADO DE OFICIO EN LA SENTENCIA, PREVIO AL ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Del análisis de los artículos 98, 99, 103, 203 y 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla se observa que **el interés jurídico esta previsto por la Ley como un presupuesto procesal que debe ser estudiado de oficio en la sentencia,** previo al análisis del fondo del asunto con base en las acciones y excepciones hechas valer que, además no es subsanable: de ahí que la circunstancia de que el juez natural hubiera admitido la demanda propuesta por el actor, no implica, en absoluto, que se tenga por reconocido para los efectos legales del juicio, el interés jurídico y legitimación del interesado, por el simple motivo de haber intentado la acción pues, como quiera que sea, **ello no releva a la autoridad judicial para analizar su cumplimiento al dictar la sentencia,** previo al estudio de la cuestión de fondo de la litis, y, para el caso **de no cumplirse dicho requisito, declarar la improcedencia de la acción con fundamento en el artículo 355 de ese Ordenamiento Procesal Civil cuando se hace valer como excepción la falta de legitimación.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 107/2009 René García Camacho. 28 de Marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

A lo anterior, cabe hacer mención que esta autoridad partidaria, al realizar la primera lectura del escrito que se provee, al no administrarse los hechos de manera congruente y clara y al no encontrarse acreditada afectación al interés jurídico, ni afectación a los derechos partidarios del militante, es menester señalar que el escrito presentado por el promovente encuadra en el supuesto de *frivolidad*. - - - - -

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: - - - - -

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el

uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.

Tercera Época

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-033/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-050/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. [SUP-JRC-051/2002](#). Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión Estatal de Justicia Partidaria, con fundamento en los Artículos 209, 210, 211, 214 fracciones I, III, X y XII, y 215 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional; 1, 2, 3 fracción III, 4 fracción II, 28 y 31 fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria; 1, 2, 3, 5, 6, 8 al 22, 23 fracción III, 34, 35, 43 al 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, dicta los siguientes: - - - - -

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Se decreta la improcedencia y en consecuencia se **DESECHA DE PLANO** el medio de impugnación que pretenden hacer valer los **VECINOS DE LA COLONIA RANCHO DE MAYA Y DEL SECCIONAL 5353 DEL MUNICIPIO DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO**, al no acreditarse la legitimación de quien promueve ni demostrarse hechos o actos constitutivos de violaciones realizadas por los órganos del Partido Revolucionario Institucional en agravio de los promoventes, en los términos debidamente motivados y fundamentados en los Considerandos de esta resolución. - - - - -

SEGUNDO.- Se acuerda el desechamiento del presente asunto por actualizarse objetivamente la hipótesis jurídica prevista por la fracción IV del artículo 49 del Reglamento de Medios de Impugnación, conforme los argumentos que se señalan en los CONSIDERANDOS de la

presente Resolución, ordenándose se archive el presente expediente como asunto totalmente concluido. -----

TERCERO.- Notifíquese a los promoventes en términos del párrafo segundo del artículo 34 del Reglamento de Medios de Impugnación, mediante cédula que se fije en los Estrados de este órgano de Justicia Partidaria, en virtud de que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, surtiendo sus efectos el día y hora de su fijación. -----

Así lo resolvió en pleno la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, y por mandato de lo dispuesto por el artículo 16 fracción IV del Reglamento Interior de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, se autoriza al Presidente LICENCIADO JORGE TORRES RODRÍGUEZ a su firma para la debida publicación y notificación de la presente, asistido por el Secretario General de Acuerdos LICENCIADO LUIS REYNA GUTIERREZ. -----

“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”

POR LA COMISIÓN

PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

JORGE TORRES RODRÍGUEZ

LUIS REYNA GUTIÉRREZ